

Señor:

JUEZ DE TUTELA
Ciudad,
E.S.D

REF. ACCION DE TUTELA DE: NIDIA JOHANNA RODRIGUE BELTRAN contra LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA.

Yo NIDIA JOHANNA RODRIGUEZ BELTRAN, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.951.055 como aparece al pie de mi respectiva firma, en ejercicio del articulo 86 de la Constitución Nacional, comedidamente me permito instaurar ACCION DE TUTELA como mecanismo transitorio contra la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA , INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA teniendo en cuenta a que se me protejan los derechos fundamentales de petición del debido proceso, a la información, al trabajo y demás que se configuren, los que se ha sido vulnerados por las accionadas conforme a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: - Que la comisión nacional del servicio civil- CNSC, mediante acuerdo No. 2081 de fecha 21 de septiembre de 2021, convocó proceso de selección, para proveer los empleos de vacancia definitiva del ICBF.

SEGUNDO: - Me inscribí para aspirar al cargo de profesional universitario grado 07 código 2044 OPEC 166313

TERCERO: - La comisión nacional del servicio civil, a través de la plataforma SIMO, notifico a la suscrita de la fecha, lugar y hora para presentar la prueba básica de competencias funcionales y comportamentales aplicada por la universidad de pamplona.

CUARTO: - La universidad de pamplona publico los resultados del concurso de méritos el día 22 de junio de 2022, por medio del aplicativo de SIMO, respecto de las competencias funcionales y comportamentales, siendo admitida.

QUINTO: - La valoración de Antecedentes fueron publicados por la Comisión Nacional del Servicio Civil el 28 de octubre de 2022 a través del aplicativo SIMO. Teniendo como puntaje

SEXTO: - En la valoración de Antecedentes la Universidad de pamplona encargada de realizar este proceso, no tuvo en cuenta mi experiencia profesional en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entre el 11 de diciembre 2008 y el 31 de diciembre 2014. Siendo evidente el error, puesto que en el certificado laboral es claro que el cargo ejercido en esos años fue profesional universitario- **Rol: Trabajo Social**, lo mismo que se pide en esta convocatoria al igual que la descripción de funciones, las cuales se evidencian claramente en el certificado laboral; mostrándose así que yo ejercí exactamente las mismas funciones y el mismo cargo que se están pidiendo en este concurso.

SEPTIMO: El 31 de octubre a las 00:00 horas, se abrió el espacio de reclamaciones frente a la valoración de antecedentes a través del aplicativo SIMO, estableciendo como fecha límite el 04 de noviembre hasta las 23:59 horas.

OCTAVO: El día 02 de noviembre. Yo hice mi escrito de reclamación frente a las inconsistencias en la valoración de antecedentes e intenté conectarme en el aplicativo SIMO en varias oportunidades durante la mañana del 03 de noviembre sin lograrlo.

NOVENO: El día 03 de noviembre de 2022 y viendo que el aplicativo SIMO no funcionaba, siendo las 9:58 am, me comuniqué por chat con Heidy Mejía de atención al usuario de la Comisión Nacional del Servicio Civil, quien me sugirió continuar intentado conectarme a la página, limpiar y borrar el historial de navegación. Lo cual continúe haciendo durante el transcurso del día. Heidy Mejía, me informa que, aunque el sistema tenga fallos, solo se pueden hacer las reclamaciones a través del aplicativo SIMO y me sugiere hacer una petición formal a la comisión Nacional del Servicio Civil al proceso de selección.

DECIMO: El día 03 de noviembre de 2022 siendo las 11:00am, envíe una petición a la comisión Nacional del Servicio Civil, solicitando se me diera una solución frente a los fallos del aplicativo SIMO y se me garantizara mi derecho a la reclamación. Ese mismo día a las 5:55pm la CNSC me responde que debía intentar conectarme de nuevo en el aplicativo SIMO y me dan las mismas instrucciones técnicas ya nombradas antes por Heidy Mejía como: limpiar o borrar el historial de navegación y utilizar el navegador Chrome. Instrucciones que intente de nuevo en varias ocasiones durante el día, sin éxito. Ese mismo día, el 03 de noviembre intente conectarme en varias ocasiones durante el día y durante la noche, entre la 12:00 am y las 5:00am, de nuevo sin éxito.

ONCE: - El 04 de noviembre 2022 intente nuevamente conectarme en el aplicativo SIMO durante la mañana, sin ningún éxito nuevamente. Siendo las 11:00am, solicite a mi amiga HASBLEIDY CAICEDO, intentar conectarse en el aplicativo SIMO, ella tampoco logro hacerlo. Continúe intentando durante el día y la noche y finalmente llego la hora límite de plazo, y el aplicativo nunca me permitió conectarme y hacer mi reclamación.

DOCE: - La comisión Nacional del Servicio Civil nunca me dio una solución a los fallos que tuvieron en su aplicativo SIMO y me impidieron ejercer mi derecho a la reclamación y a la contradicción.

TRECE: - Considero que el concurso de méritos posee irregularidades que afectan el debió proceso, el derecho al trabajo, el acceso a la información en debida forma, a la contradicción y oposición de esta, vulnerando los derechos que tengo como participante en dicha convocatoria.

CATORCE: - Que las irregularidades en la valoración de antecedentes y los fallos en el aplicativo SIMO durante el periodo establecido para hacer las reclamaciones, afectan mi posición en la lista de elegibles la cual esta próxima a publicarse.

QUINCE: En el aplicativo SIMO, la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL pone una respuesta a mi solicitud fechada del 15 de diciembre de 2022 y la cual conocí de su existencia el 26 de febrero de 2023, dado que nunca me informaron que habían dado otra respuesta a una de mis peticiones por esta vía. En esta respuesta se evidencia que no se hizo un estudio adecuado de mi hoja de vida, toda vez que insisten en desconocer mi experiencia con el mismo ICBF entre el 11 de diciembre 2008 y el 31 de diciembre 2014; argumentando que no es posible identificar las funciones desempeñadas, lo cual no es acertado dado que en el certificado laboral emitido por el mismo ICBF el 11 de diciembre de 2017, se evidencian claramente las funciones, siendo exactamente las mismas que se piden para el cargo al cual estoy aspirando.

PRETENSIONES

1. – Tutelar los derechos al debido proceso, a la información y al trabajo, y demás que se configuren o vulneren.
2. – Como consecuencia de lo anterior, ordenar a LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA, que en el termino de 48 horas siguientes a la notificación de fallo respectivo tutelar proceda a corregir los fallos en la valoración de antecedentes, y se me respete mi derecho al debido proceso, a la información, los cuales no se me respetaron debido a los fallos del aplicativo SIMO.
3. – Solicitar al ICBF, validar el certificado laboral expedido por ellos mismos el 11 de diciembre de 2017, para el periodo entre el 11 de diciembre 2008 y el 31 de diciembre 2014.
4. –Se tenga en cuenta en la valoración de antecedentes, mi experiencia de trabajo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entre el 11 de diciembre 2008 y el 31 de diciembre 2014. Se hagan las correcciones respectivas a la valoración de antecedentes y se corrija el puntaje que me asignaron.

PRUEBAS

1. Copia del escrito de reclamación dirigido a LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, hecho el 02 de noviembre de 2022.
2. Copia de los pantallazos donde se muestra los fallos en el aplicativo SIMO.
3. Copia del chat con la funcionaria Heidy Mejia, el 03 de noviembre de 2022, donde se le manifiesta los fallos en el aplicativo SIMO.
4. Copia de la queja instaurada ante la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL por la falla en el aplicativo SIMO. Radicada el 03 de noviembre 2022.
5. Copia de la respuesta a la petición hecha frente a LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, fechada del 04 de noviembre del 2022.
6. Copia de la respuesta dada por parte de la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL fechada 15 de diciembre 2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Análisis de la procedibilidad de las acciones de tutela

82. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.

El artículo 86 de la Constitución dispone que la acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo, que tiene por objeto garantizar la «protección inmediata de los derechos fundamentales» de las personas, por medio de un «procedimiento preferente y sumario». De acuerdo con lo previsto por el Decreto 2591 de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de esta corte, son requisitos generales de procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la causa, ii) la inmediatez y iii) la subsidiariedad. El cumplimiento de estos requisitos es una condición para que el juez de tutela pueda emitir un pronunciamiento de

fondo. A continuación, la Sala examinará el cumplimiento de estas exigencias respecto de las acciones de tutela bajo revisión.

10. Derecho fundamental de petición. Reiteración de jurisprudencia

171. Fundamento normativo. De conformidad con el artículo 23 de la Constitución, «[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución». En desarrollo de esta disposición constitucional, se expidió la Ley Estatutaria 1755 de 2015, que regula los aspectos esenciales de este derecho. En ella se reiteró que «toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades [...] por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución, completa y de fondo sobre la misma». En reiteradas oportunidades, la Corte ha señalado que el derecho fundamental de petición es imprescindible para la consecución de ciertas finalidades constitucionales. Así, ha sostenido que contribuye a la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y a la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan.

172. Contenido del derecho de petición. Esta corporación ha indicado que el derecho en cuestión se encuentra conformado por los siguientes elementos: i) la formulación de la petición, esto es, la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que estas puedan negarse a recibirlas o abstenerse de tramitarlas; ii) la pronta resolución, es decir, la facultad de exigir una respuesta pronta y oportuna de lo decidido, dentro de un plazo razonable, que debe ser lo más corto posible; iii) la respuesta de fondo, que hace hincapié en el deber de ofrecer respuesta clara, precisa y de fondo o material, lo que supone que la autoridad competente hade pronunciarse sobre la materia propia de la solicitud de manera completa, congruente y sin evasivas, respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados, con independencia de que la respuesta sea favorable, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido; iv) la notificación de lo decidido, para que el ciudadano tenga conocimiento de la solución que las autoridades hayan dispuesto sobre la petición formulada.

173. Relación con otros derechos. Esta Corte también ha reconocido que el ejercicio del derecho de petición «permite hacer efectivos otros derechos de rango constitucional». Por esta razón, esta garantía fundamental «se considera también un derecho instrumental». De tal suerte, además de constituir una «garantía que resulta esencial y determinante como mecanismo de participación ciudadana, dentro de una democracia que se autodefine como participativa», el derecho de petición constituye un «vehículo que permite y facilita el ejercicio de muchos otros derechos, tanto fundamentales como sin esa connotación».

174. Solicitudes de acceso a información pública. Una de las manifestaciones del derecho fundamental de petición consiste en que, mediante su ejercicio, las personas pueden acceder a la información pública. La Corte Constitucional se ha ocupado de fijar el alcance de esta garantía de acceso a la información, pues no todo dato es susceptible de ser entregado al interesado. En Sentencia SU-139 de 2021, esta Corte analizó y sintetizó las reglas jurisprudenciales sobre la materia, así:

- 75. Información pública o de dominio público: alude a la información que puede ser obtenida sin reserva alguna, como por ejemplo los documentos públicos, las providencias judiciales debidamente ejecutoriadas, los datos sobre el estado civil, entre otros.

- 76. Información semiprivada: refiere a aquellos datos personales o impersonales que requieren de algún grado de limitación para su acceso, incorporación a bases de datos y divulgación; en estos casos, la información solo puede ser obtenida mediante orden de autoridad judicial o administrativa y para los fines propios de sus funciones.
- 77. Información privada: atiende a la información que se encuentra en el ámbito propio del sujeto concernido y a la que, por ende, solo puede accederse mediante orden de autoridad judicial competente. Entre esta información se encuentran los documentos privados, las historias clínicas, los datos obtenidos en razón a la inspección del domicilio o luego de la práctica de pruebas en procesos penales sujetos a reserva, entre otros.
- 78. Información reservada o secreta: este universo de información está relacionado con los datos que solo interesan a su titular, en razón a que están íntimamente vinculados con la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la intimidad y a la libertad. Entre estos datos se encuentran los asociados a la preferencia sexual de las personas, a su credo ideológico o político, a su información genética, a sus hábitos, entre otros. Cabe anotar que esta información, por lo demás, no es susceptible de acceso por parte de terceros, “salvo que se trate de una situación excepcional, en la que el dato reservado constituya un elemento probatorio pertinente y conducente dentro de una investigación penal y que, a su vez, esté directamente relacionado con el objeto de la investigación”.

175. En concordancia con la jurisprudencia constitucional, la Ley 1755 de 2015, determinó que, por regla general, toda información es pública y de libre acceso para los ciudadanos. Asimismo, previó que, excepcionalmente y por motivos de reserva, se puede limitar —e incluso negar— el acceso a cierto tipo de información. Ahora bien, el artículo 26 de la misma ley dispuso un procedimiento jurisdiccional de insistencia para que el ciudadano controviértala decisión que niega el acceso a la información, por tratarse, prima facie, de información sometida a reserva.

176. Información reservada en los procesos de la Rama Judicial. Tratándose de la carrera judicial, la LEAJ contiene una serie de disposiciones que regulan los concursos de méritos que se adelanten con el propósito de proveer los cargos de magistrados de tribunal, de las salas de los extintos consejos seccionales de la judicatura, jueces y empleados que por disposición expresa de la ley no sean de libre nombramiento y remoción. En cuanto a la información que integra este proceso de mérito, el parágrafo segundo del artículo 164 dispone que «[l]as pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como también toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquéllas, tienen carácter reservado».

177. En la Sentencia SU-617 de 2013, la Sala Plena resolvió varias acciones de tutela presentadas con ocasión del concurso de méritos para proveer empleos vacantes de docentes y directivos docentes, de instituciones educativas oficiales en entes territoriales, dentro de las convocatorias 056 a122 de 2009 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. En desarrollo del concurso, los accionantes presentaron solicitudes dirigidas a que la Comisión suministrara copia del cuadernillo de preguntas y respuestas de la prueba de aptitudes practicada, peticiones que fueron negadas por la entidad accionada. La Corte sostuvo que le asistía razón a la CNSC para negar las solicitudes, toda vez que el artículo 4 de la Ley 1324 de 2009, establece expresamente que dicho material está sometido a reserva y que, en todo caso, si los interesados consideraban que se debía suministrar dicha información, podían acudir al

mecanismo de insistencia previsto, en ese entonces, por el artículo 21 de la Ley 57 de 1985. Por tal razón, concluyó que las acciones de tutela eran improcedentes respecto del derecho fundamental de petición.

178. En cualquier caso, es preciso tener en cuenta que, con arreglo a lo establecido por la jurisprudencia constitucional, «la reserva no le puede ser oponible al directamente implicado, pues de ser así se le impediría obtener los elementos necesarios para efectuar las reclamaciones o adelantar las acciones judiciales que considere pertinentes» Del Debido Proceso. El debido proceso se encuentra desarrollado en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991, así: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.” (Subrayado fuera de texto para destacar) De lo anterior, se desprende que el debido proceso ostenta la calidad de derecho fundamental y además como un principio informador de todas las actuaciones que se desplieguen tanto en sede administrativa como en sede judicial, es decir, es forzosa su observancia, so pena que las actuaciones estén en contra vía de la norma constitucional. Aunado a ello, se debe garantizar entre otros, los derechos procesales de las partes en todas las actuaciones judiciales y administrativas, el derecho a la igualdad y equidad, tal como está contemplado en el artículo 13 de la Constitución Política, de manera que ninguna autoridad administrativa o judicial, sea el caso, puede saltarse las reglas propias de su competencia o actuaciones y todas las autoridades deben apreciar conforme al mandato legal dentro de su ámbito de competencia, cosa que no ocurre en el presente caso, lo que comporta mantener la garantía de su efectivo equilibrio y congruencia en el actuar de la administración, de manera que un acto procesal se considera válido cuando no causa menoscabo a tales derechos fundamentales, pilar básico del Debido Proceso, para el caso se vislumbra que hay vía de hecho que conlleva una violación del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 superior, porque la actuación administrativa emanada de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA modifica las reglas del concurso establecidas en el Acuerdo de Convocatoria, Guía para el aspirante e instrucciones establecidas en el cuadernillo al momento de realizar las calificaciones, aunado a las irregularidades evidenciadas en la estructuración de la convocatoria como tal.

MEDIDA PROVISIONAL

Solicito como medida provisional, la suspensión provisional de la ejecución del concurso de méritos destinado a la conformación del Registro Seccional de Elegibles para la provisión de los cargos de empleados de carrera del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, teniendo en cuenta la proximidad de la publicación de la lista de elegibles.

COMPETENCIA

Es usted señor juez el competente para conocer del asunto, por la naturaleza de los hechos, lugar donde ocurrieron la violación de los derechos fundamentales y de conformidad con el decreto 1382 de 2000.

JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento, me permito manifestar que, con anterioridad a la presentación de esta acción de tutela, no se ha instaurado otra sobre los mismos hechos y pretensiones.

NOTIFICACIONES

La suscrita en el correo electrónico johanarodriguezz@hotmail.com y móvil 311 241 3614

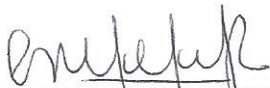
La comisión nacional del servicio civil, en la Carrera 16 N.º 96 – 64 Piso 7 de Bogotá D.C. correo electrónico notificacionesjudiciales@cncs.gov.co.

La universidad de pamplona en la Calle 5 N.º 2 – 38 Barrio Latino Cúcuta correo electrónico cread.nortedesantader@unipamplona.edu.co/o cread.cundinamarca@unipamplona.edu.co

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la Carrera 68 N.º 64C – 75 Bogotá D.C., correo electrónico Notificaciones.Judiciales@icbf.gov.co

El Departamento Administrativo de la Función Pública en la Carrera 6 N.º 12 – 62 Bogotá D.C, correo electrónico notificacionesjudiciales@funcionpublica.gov.co

Atentamente,



NIDIA JOHANNA RODRIGUEZ BELTRAN
C.C. 52.951.055 Bta.